

Argentina. La rebelión de las cacerolas

Antonio Camou

Las cacerolas argentinas de diciembre marcaron el final del régimen monetario de convertibilidad y de la gestión de Fernando de la Rúa. Con problemas irresueltos y con otros nuevos, el gobierno de Eduardo Duhalde intenta intervenir, sin poder prever resultados ciertos, en el conflicto social, la puja distributiva y una clase política acentuadamente desprestigiada.

La política es el arte de evitar que toda la gente se ponga «brava» el mismo día. Citado por un economista latinoamericano que trabaja, o trabajaba, para el Banco Mundial.

No los convocó nadie. Se fueron juntando solos, sin banderías políticas ni distintivos partidarios ni cánticos preparados. Marchaban en grupos, en familias, en parejas, de a uno. Había jóvenes y viejos, adultos y niños. Eran en su mayoría lo que todavía se llama «clase media»: ese territorio nebuloso y decadente entre los pudientes y los

pobres que aún conserva su trabajo, tiene una casa con servicios, acceso a la salud y la firme creencia de que la educación es una vía regia para abrirse camino en la vida.

Comenzaron reuniéndose en las esquinas de los barrios, en los cruces de las calles más concurridas, en las plazas. Eran las 12 de la noche pero nadie se quería ir a dormir. Iban poderosamente armados, sobre todo las mujeres: llevaban cacerolas, sartenes, cucharones soperos, ensaladeras, cualquier inocente utensilio de cocina que se pudiera

Antonio Camou: sociólogo argentino; doctor en Ciencia Política (Flacso-México); director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata;

@: <acamou@huma.fahce.unlp.edu.ar>.

Palabras clave: situación política, crisis social, protestas, Argentina.

hacer sonar con ruido y furia. Algunos improvisaron rudimentarios carteles escritos a mano alzada que decían más o menos lo mismo: «Que se vayan, que se vayan», «Basta de corrupción», «Dejen de robar», «Queremos trabajo», «Abajo los políticos», «Abajo los jueces corruptos», «Fuera De la Rúa y Cavallo». Algún vecino entendió que estaba viviendo una jornada histórica y se animó a sacar una bandera argentina; a otro se le ocurrió una idea obvia que pronto fue imitada por una multitud imparable: marchar hacia la Plaza de Mayo, el centro histórico de Buenos Aires y corazón político del país, para cantar su bronca. Era la noche del jueves 19 de diciembre de 2001, y el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa, cuarto presidente constitucional desde la recuperación de la democracia argentina, irremediamente había comenzado a desmoronarse. Al día siguiente firmaría su renuncia indeclinable al cargo, cuando aún faltaban dos largos años para terminar su vacilante mandato. Con esa salida también quedaría sellado el destino del esquema de convertibilidad de la moneda, con paridad 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar, que durante más de 10 años había sido el eje articulador de la política económica.

La confluencia de distintos tipos de reclamos sociales terminaron por darle el tiro de gracia a un modelo

político-económico que día a día se hacía cada vez más insostenible. En principio, la desesperada protesta mañanera de los pobres y desempleados que ese mismo día 19 asaltaron comercios y saquearon mercados para proveerse alimentos; luego, el «cacerolazo» deliberadamente pacífico de los sectores medios, que repudiaron la ineficacia del Gobierno, la corrupción de la clase política y la inmovilización de sus depósitos bancarios, decidida a principios de diciembre en un último intento gubernamental por frenar una corrida financiera de consecuencias desastrosas. Por si fuera poco, hay que sumarle la protesta de algunos sectores políticamente radicalizados y de jóvenes hijos de la exclusión y la marginalidad, que coparon algunas áreas de la ciudad provocando disturbios varios, y que terminaron siendo la coartada perfecta de una represión desbocada. El saldo trágico incluye una treintena de muertos (por la represión y por la justicia propia de comerciantes para defenderse de los saqueos), y cientos de heridos.

Pero las protestas marcaron el final, no el inicio de la historia, y en esa historia hay que tratar de separar los problemas que heredó la Alianza (la coalición electoral que llevó a De la Rúa al poder) de los problemas que se creó a sí misma una vez que llegó al Gobierno. En el primer caso hay que anotar –telegráficamente–

las propias rigideces del esquema de convertibilidad, que no solo requería un estricto equilibrio fiscal sino que también dificultaba la posibilidad de «flexibilizar» internamente la economía a la hora de soportar choques externos. Y en esto hay que recordar que el gobierno menemista dejó un rojo fiscal poco menos que inmanejable, aunado al hecho de que las devaluaciones asiáticas, rusa y brasileña, junto con la apreciación del dólar frente al euro, dibujaron un horizonte externo altamente desfavorable para el intercambio comercial argentino. Pero también la Alianza se esmeró a la hora de cometer desaciertos. Empezando por el propio armado de una estructura política que juntó dirigentes y partidos sin un proyecto económico coherente, plagado de internismos mezquinos y de personalismos de patas cortas, y siguiendo por el propio De la Rúa, quien colaboró con su inefable incapacidad para conformar un polo de poder presidencial creíble. Por otro lado, ni unos ni otros lograron ofrecer una ecuación de políticas sociales capaces de paliar la aguda situación de desempleo, subempleo y pobreza, que hundió en la desesperación a grandes segmentos de la población. De este modo, 42 meses ininterrumpidos de recesión, 18% de desempleo y otro tanto de subempleo, junto a un inédito nivel de familias en situación de indigencia terminaron por preparar

un cóctel explosivo. Mucho de todo esto pudo leerse en las últimas elecciones legislativas de octubre de 2001, cuando 20% de la población votó en blanco o anuló su voto, y otro 20% optó por quedarse en casa, y el resto terminó por escucharse en el batir de las cacerolas decembrinas y en el luctuoso estallido social que lo acompañó.

Ya casi no vale la pena recordar el grotesco dominó de la sucesión presidencial, que inicialmente ungió al efímero Adolfo Rodríguez Saá junto con la promesa de elecciones mediante un inconstitucional procedimiento electoral, ni los intrincados vericuetos de la interna del Partido Justicialista, que tuvo que elegir contra reloj a un presidente provisional. Finalmente, y con un amplio espectro de acuerdos, que temporariamente hilvana a peronistas, radicales y frepasistas, el ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, fue elegido para completar el mandato presidencial, hasta diciembre de 2003.

La profundidad de la crisis, la fuerza de las presiones cruzadas entre diferentes actores socioeconómicos y políticos, y la fragilidad de los acuerdos alcanzados no alientan ningún pronóstico certero sobre el futuro inmediato. Por lo pronto, y una vez decidida la devaluación del peso y la «virtual» suspensión del

pago de la deuda, el Gobierno tiene una abultada agenda de desafíos. Por el lado económico, tiene que prestar atención a dos variables claves: precios y tipo de cambio. El peor de todos los fantasmas es un desboque del precio del dólar «libre», que termine impulsando un agudo proceso inflacionario junto con la profundización de la recesión y la contracción del poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la necesidad de encontrar una respuesta adecuada a la cuestión de los depósitos bancarios inmovilizados, fiel testimonio de la severa crisis de confianza que se apoderó de los agentes económicos argentinos, y la obligación de presentar un presupuesto público equilibrado, una verdadera misión imposible si pensamos que el déficit fiscal de 2001 fue de casi 11.000 millones de dólares (¡el equivalente a la base monetaria del sistema!). El tema del presupuesto será clave, no solo para darle credibilidad al plan económico del nuevo gobierno, sino también para poner a prueba el grado de coherencia de los acuerdos políticos y sociales alcanzados entre las fuerzas que sustentan al gobierno duhaldista. En el horizonte de mediano plazo empieza a querer dibujarse una «nueva alianza» productiva que sustentaría al nuevo gobierno, por oposición a la preeminencia de banqueros y

empresas de servicios públicos privatizadas, pero aún es temprano para juzgar su perfil definitivo. Mientras tanto, la esposa del presidente, Hilda «Chiche» Duhalde, será una verdadera ministra sin cartera, a cargo de la estratégica área social del Gobierno. De su eficacia para empezar a responder a las ingentes demandas sociales mucho dependerá el grado de acompañamiento que los sectores más vulnerables le prodiguen a la gestión entrante.

La Argentina dejó a mitad de camino un presidente constitucional, desparramó por todo el mundo las imágenes de un país asolado por la desigualdad social y la violencia, inmovilizó depósitos de pequeños y medianos ahorristas argentinos que creyeron que valía la pena ahorrar en el país, entró en cesación de pagos y salió abruptamente de un régimen de cambio fijo. Ante este paisaje, la clase política –todavía– no ha dado muestras de que hará un intento serio y contundente por bajar el escandaloso costo político, algo que reclama sin distinciones toda la sociedad. El nuevo gobierno sabe que debe recorrer un estrecho desfiladero donde el batir de indignadas cacerolas no es el peor sonido que puede llegar a oír.

San Carlos de Bariloche, 10 de enero de 2002